



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

D. ALFONSO RAMOS DE MOLINS SÁINZ DE BARANDA, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión 40/04 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 11 de noviembre de 2004, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Por el que se aprueba la:

CONTESTACIÓN A LA CONSULTA PLANTEADA POR ASTEL ACERCA DE LA COMPATIBILIDAD DE LAS FACILIDADES DE SELECCIÓN DE OPERADOR CON EL PLAN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL ABONO SOCIAL QUE SE PREVÉ EN EL MARCO DE LA NORMATIVA SOBRE EL SERVICIO UNIVERSAL DE TELECOMUNICACIONES (RO 2004/1605).

I. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA CONSULTA.

El 4 de octubre de 2004 se ha recibido en el Registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) escrito presentado por el Director General de ASTEL (Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones) en el que, básicamente, expone lo siguiente:

- Que *“en la actualidad TESAU [Telefónica de España, S.A.U.] está ofreciendo dentro de su catálogo de tarifas reguladas el producto ABONO SOCIAL”*.
- Que *“la oferta de este abono social es resultado de la aplicación del art. 16 del R.D. 1736/1998, de 31 de julio, por el cual la empresa designada para la prestación del servicio universal deberá garantizar el acceso al servicio telefónico fijo a los usuarios con necesidades sociales especiales en condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de los usuarios”*.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- Que *"no existe en la normativa sectorial limitación alguna para los usuarios del ABONO SOCIAL a acceder a los servicios de otro operador empleando la preselección o selección de los servicios de dicho operador"*.
- Que –según expone ASTEL- *"se han planteado casos en los cuales los usuarios han optado por no obtener servicios de acceso indirecto al indiciar al operador de acceso indirecto que perderían las ventajas que les reporta la cuota de abono social"*.

Expuestos estos hechos, ASTEL formula consulta a la CMT en los siguientes términos:

"ASTEL, mediante la presente consulta, solicita a esa Comisión que aclare si la preselección o selección de llamada puede ser contratada por un usuario acogido al ABONO SOCIAL de TESAU, ofrecido conforme al art. 16 R.D. 1736/1998, de 31 de julio.

Igualmente ASTEL solicita de esa Comisión que aclare si los usuarios acogidos al ABONO SOCIAL de TESAU tienen establecida alguna limitación en cuanto a la contratación de servicios de otros operadores."

El presente Acuerdo tiene por objeto dar contestación a la consulta formulada por ASTEL acerca de las dos cuestiones anteriores, para lo cual se analizará tanto la normativa de servicio universal como la normativa en materia de selección de operador que resulten aplicables.

II. HABILITACIÓN COMPETENCIAL.

El artículo 48.3 m) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, establece que, en la materia de telecomunicaciones, la CMT ejercerá *"Cualesquiera otras [funciones] que legal o reglamentariamente se le atribuyan o que le encomiende el Gobierno o el Ministerio de Ciencia y Tecnología"*.

El Reglamento de la CMT (aprobado por el Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre) atribuye a la CMT, en la letra a) del apartado 2 del artículo 29 (*"Otras funciones"*), la competencia para *"Resolver las consultas que puedan formularle los operadores de redes y servicios de telecomunicación y las asociaciones de consumidores y usuarios de estos servicios"*.

ASTEL no tiene la consideración de operador de redes o servicios de telecomunicaciones. Se trata, sin embargo, de una asociación en la que están integradas empresas que sí tienen tal condición.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Según indica ASTEL en su escrito de consulta, *“dentro de los objetivos de la Asociación se encuentra el de la representación, gestión y defensa de los intereses empresariales de sus miembros, fomentando los principios de libertad de acceso y libre competencia, dentro de la legalidad, al mercado de las telecomunicaciones./ Con tal propósito su actuación podrá consistir, entre otras, en participar y contribuir en la definición de un marco operativo favorable al desarrollo del sector mediante, entre otras cosas, la participación en debates, consultas, encuestas o procedimientos similares que se lleven a cabo respecto a las actividades o actuaciones de las Administraciones de Telecomunicaciones (artículo 2ª de los Estatutos de la Asociación mencionada, en adelante, ASTEL)”*.

En definitiva, si bien ASTEL, como tal, no es un operador de telecomunicaciones, se trata de una asociación que agrupa a operadores, lo que permite enmarcar la consulta presentada ante esta Comisión dentro del ámbito del artículo del Reglamento de la CMT antes citado.

III. SOBRE LAS PRESTACIONES QUE INCLUYE EL CONCEPTO DE ABONO SOCIAL.

El denominado “abono social” –al que se refiere la consulta presentada por ASTEL- es un plan de precios complementario, previsto en el marco de la normativa sobre servicio universal, destinado a colectivos de pensionistas y jubilados en los que concurren determinadas circunstancias. Está contemplado en el apartado segundo.3 b), párrafo primero, de la Orden Ministerial de 21 de diciembre de 2001, por la que se regulan determinados aspectos del servicio universal de telecomunicaciones. En este precepto se dispone lo siguiente:

*“El carácter asequible de los precios del conjunto de servicios incluidos en el servicio universal vendrá definido por las siguientes condiciones:
(...)*

Que se ofrezcan planes de precios complementarios para colectivos específicos y, en particular, los siguientes:

Abono social.–*Este plan de precio estará destinado a jubilados y pensionistas cuya renta familiar no exceda del salario mínimo interprofesional y consistirá en la aplicación de una bonificación en el importe de la cuota de alta y en la cuota fija de carácter periódico.”*

Este plan de precios responde al carácter prioritario que se atribuye, entre otros, a los colectivos de pensionistas y jubilados, en relación con el servicio universal. Lo establece el punto 2 del apartado segundo de la Orden Ministerial indicada:



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

“Los colectivos y áreas geográficas prioritarias en relación con el servicio universal son los siguientes:

a) Los municipios que no dispongan de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago en los términos de los apartados décimo y undécimo de la presente Orden.

b) Los pensionistas y jubilados cuya renta familiar no exceda del salario mínimo interprofesional y el colectivo de discapacitados que incluye a las personas invidentes y con graves dificultades visuales, las sordas y las que tengan graves dificultades auditivas, las minusválidas físicas y cualesquiera otras con discapacidades que les impidan manifiestamente el acceso normal al servicio telefónico fijo o le exijan un uso más oneroso del mismo.”

Según la disposición transitoria segunda de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, Telefónica de España, S.A.U. es la entidad a la que corresponde la prestación del servicio universal, incluido, por tanto, el plan de precios correspondiente al “abono social”.

En lo que se refiere a la cuantía de este plan de precios, ha de tenerse en cuenta que, como sucede con las demás garantías que comprende el concepto de servicio universal, está prevista su fijación por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. El artículo 18.1, párrafo segundo, del Reglamento relativo al servicio universal (aprobado por Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio; vigente según la disposición transitoria primera, apartado 5, de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones) establece que “*La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Ministerio de Fomento [debe entenderse Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de conformidad con el Real Decreto 553/2004, de 17 abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales] y previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, fijará periódicamente los precios de los servicios incluidos dentro del servicio universal, garantizando su carácter asequible*”.

El Acuerdo de 25 de septiembre de 2003, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se aprueba el marco de regulación de los precios de determinados servicios prestados por Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, para el año 2004 (cuya publicación en el B.O.E. se dispone por Orden PRE/3103/2003, de 5 de noviembre) se refiere, en el apartado 2 de su Anexo 1, al coste del servicio universal, señalando lo siguiente:

“2. Resto de conceptos tarifarios del servicio telefónico fijo.—



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Los precios del resto de conceptos tarifarios del servicio telefónico fijo, no incluidos en las anteriores modalidades de regulación, quedan liberalizados, excepto:

a. Los precios del servicio de información nacional sobre el contenido de las guías y los precios de las llamadas desde teléfonos de uso público situados en el dominio público de uso común, incluidos en el Servicio Universal de Telecomunicaciones, que no serán superiores durante el año 2004 a los vigentes a 31 de diciembre de 2003.

b. El resto de los conceptos tarifarios de los servicios incluidos en el servicio universal de telecomunicaciones, que continuarán sujetos a lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de diciembre de 2001, por el que se aprueban los precios de los servicios incluidos dentro del servicio universal de telecomunicaciones y que fue publicado en el anejo II de la Orden PRE/68/2002, de 16 de enero.

Por su parte, el mencionado Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de diciembre de 2001 (publicado por la Orden PRE/68/2002, de 16 enero 2002) establece lo siguiente:

“3. Planes de precios para personas discapacitadas o con necesidades sociales especiales.

Sin perjuicio de lo establecido en los dos puntos anteriores, se establecen los siguientes precios de los planes complementarios para colectivos específicos:

3.1. Abono social:

Reducción del 70 por 100 en la cuota de alta del servicio telefónico fijo disponible al público y reducción del 95 por 100 en la cuota de abono mensual del mismo servicio, para jubilados y pensionistas cuya renta familiar no exceda del salario mínimo interprofesional.

El operador designado podrá requerir de modo fehaciente a dichos abonados, con una periodicidad no inferior a la anual, para que acrediten las circunstancias que dan derecho a este tipo de abono, pudiendo suprimir la reducción del 95 por 100 en la cuota mensual de abono al servicio si no se hubieran justificado dichas circunstancias, en el plazo de dos meses desde que el abonado hubiera recibido fehacientemente el requerimiento.

3.2. (...)”

De este modo, el abono social –destinado a los jubilados y pensionistas que se encuentren en la situación descrita en el precepto anterior- consiste en un descuento que se aplica a la cuota de alta y a la cuota de abono al servicio telefónico fijo disponible al público.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

La circunstancia que se exige, en concreto, por la normativa para que los jubilados y pensionistas accedan al plan “abono social” es que su renta familiar no exceda del salario mínimo interprofesional. No se incluye ninguna otra exigencia (como la que pudiera consistir en la necesidad de que el tráfico telefónico se curse con un determinado operador).

IV. NORMATIVA EN MATERIA DE SERVICIO UNIVERSAL RELATIVA A PERSONAS CON NECESIDADES SOCIALES ESPECIALES.

IV.1. La normativa europea en esta materia.

La normativa europea en materia de comunicaciones electrónicas prevé que los Estados miembros de la Unión puedan imponer a las empresas designadas para la prestación del servicio universal la obligación de ofrecer tarifas especiales (*“opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial”*) a los consumidores con necesidades sociales (integrando este colectivo, figuran los pensionistas y jubilados a los que se refiere el “abono social”).

Así, el artículo 9.2 de la **Directiva 2002/22/CE**, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al servicio universal y a los derechos de los usuarios en relación con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, señala:

“Teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, los Estados miembros podrán obligar a las empresas designadas a que ofrezcan a los consumidores opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial, con objeto de garantizar, en particular, que las personas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales puedan tener acceso al servicio telefónico disponible al público o hacer uso del mismo.”

La finalidad de estas medidas es poner a los usuarios que tienen ciertas necesidades sociales en la misma situación que el común de los usuarios, a los efectos de acceder a los servicios en los que consiste el servicio universal (evitando, de este modo, que la necesidad social que experimentan constituya un obstáculo para acceder a los mencionados servicios). Así se explica en el considerando 7 de la Directiva mencionada:

“Los Estados miembros, en el contexto de las obligaciones de servicio universal y teniendo en cuenta las condiciones nacionales, podrán adoptar medidas específicas para los consumidores de las zonas rurales o geográficamente aisladas para garantizarles el acceso a los servicios que establece el Capítulo II [“Obligaciones de servicio universal, incluidas las



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

obligaciones sociales”] y que resulten asequibles de dichos servicios, así como para garantizar ese acceso en iguales condiciones, en particular a los ancianos, discapacitados y personas especialmente necesitadas desde el punto de vista social. Dichas medidas podrán también incluir las directamente orientadas a los consumidores con necesidades sociales específicas, proporcionando ayuda a consumidores determinados, por ejemplo mediante medidas específicas como las condonaciones de deuda, adoptadas tras un examen individualizado de las solicitudes.”

La Directiva aludida no menciona específicamente la compatibilidad, con las facilidades de selección de operador, de las medidas de servicio universal destinadas a usuarios con necesidades sociales (que es la materia objeto de la consulta planteada por ASTEL). Sin embargo, el hecho de que estas medidas tengan por objeto superar las barreras que puedan tener -para acceder a los servicios de comunicaciones electrónicas- los usuarios con necesidades sociales (poniéndolos en iguales condiciones efectivas que los demás usuarios), lleva a considerar que el hecho de adoptar tales medidas no les priva a estas personas de los demás derechos que tienen los restantes usuarios (en particular, el derecho a seleccionar el operador con el que cursará sus llamadas), pues en caso contrario, no se estaría produciendo la pretendida equiparación entre estos usuarios con necesidades sociales y el común de los mismos.

Ha de tenerse en cuenta, además, que la previsión del artículo 9.2 de la Directiva de servicio universal se realiza con un alcance general “a las personas con rentas o bajas o con necesidades sociales especiales”, sin exclusión de supuesto alguno (como pudiera ser el caso en que tales personas disfrutasen de una facilidad de selección de operador).

De este modo, para el disfrute de las tarifas especiales no se excluyen los supuestos en los que los beneficiarios tengan contratados otros servicios con operadores diferentes.

El inciso final del considerando 13 de la Directiva sostiene, nítidamente, la conclusión anterior:

“El prestador del servicio universal no debe adoptar medidas que impidan a los usuarios el pleno disfrute de los servicios ofrecidos por otros operadores o prestadores de servicios distintos, en combinación con los servicios que él mismo ofrece como parte del servicio universal.”

En el mismo sentido, abunda la exigencia contenida en el apartado 5 del artículo 9 de la Directiva, que contempla la aplicación del principio de no



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

discriminación por parte de la empresa obligada al ofrecimiento de tarifas especiales:

“En los casos en que se imponga a una empresa una obligación de aplicación de opciones tarifarias especiales, de tarifas comunes, incluida la equiparación geográfica, o el respeto de limitaciones de los precios, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las condiciones sean plenamente transparentes y se publiquen y apliquen de conformidad con el principio de no discriminación. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir la modificación o supresión de los regímenes especiales.”

De acuerdo con este principio de no discriminación, el operador obligado a ofrecer unas tarifas especiales no puede discriminar, a la hora de aplicar tales tarifas, a los usuarios, en función de circunstancias tales como que los usuarios en cuestión tengan contratados otros servicios con operadores diferentes.

IV.2. Normativa española.

La **Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones**, incorpora, según señala su Exposición de Motivos, la Directiva 2002/22/CE, antes mencionada, junto con las restantes disposiciones comunitarias que conforman el nuevo marco regulador europeo de las comunicaciones electrónicas.

En su artículo 22, esta Ley General de Telecomunicaciones recoge, dentro del concepto nacional de servicio universal, la previsión de unas medidas destinadas a los usuarios con necesidades sociales, aunque confiere al Gobierno la posibilidad efectiva de imponer (por vía reglamentaria) las correspondientes obligaciones al respecto, en beneficio de este tipo de usuarios:

“1. Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible.

Bajo el mencionado concepto de servicio universal se deberá garantizar, en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen por el Gobierno:

(...)

e) Que, cuando así se establezca reglamentariamente, se ofrezcan a los consumidores que sean personas físicas, de acuerdo con condiciones



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

transparentes, públicas y no discriminatorias, opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial, con objeto de garantizar, en particular, que las personas con necesidades sociales especiales puedan tener acceso al servicio telefónico disponible al público o hacer uso de éste.

2. Reglamentariamente se podrán adoptar medidas a fin de garantizar que los usuarios finales con discapacidad también puedan beneficiarse de la capacidad de elección de operadores de que disfruta la mayoría de los usuarios finales. Asimismo, podrán establecerse sistemas de ayuda directa a los consumidores que sean personas físicas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales.

(...)”

El precepto acoge el mismo principio de no discriminación que se contenía en la normativa comunitaria: “...se ofrezcan a los consumidores que sean personas físicas, de acuerdo con condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias, opciones o paquetes de tarifas...”

Ahora bien, el desarrollo reglamentario de las previsiones legales concernientes al servicio universal no se ha efectuado aún, a la fecha del presente Acuerdo de este Consejo.

No obstante, la disposición transitoria primera, apartado 5, de la Ley General de Telecomunicaciones establece, en relación con el servicio universal, que continuarán en vigor, hasta la aprobación de un nuevo reglamento, las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril. General de Telecomunicaciones (que se deroga por la vigente Ley 32/2003):

“En todo caso, seguirán en vigor hasta la aprobación del nuevo reglamento las normas dictadas al amparo de la Ley General de Telecomunicaciones que regulan los derechos de los consumidores y usuarios, las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, así como el resto de disposiciones reglamentarias en desarrollo del título III de dicha Ley.”

En desarrollo del Título III (“Obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones”) de la Ley General de Telecomunicaciones de 1998, se aprobó –por Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio- un **Reglamento relativo al servicio universal**, demás obligaciones de servicio público y obligaciones de carácter público en la prestación de servicios y explotación de redes de telecomunicaciones.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Pues bien, este Reglamento incluye las medidas concernientes a las personas con necesidades sociales como parte integrante del concepto de servicio universal, y, por lo tanto, como obligación que recae en el operador que presta dicho servicio (Telefónica de España, S.A.U., según lo ya indicado). El Reglamento recoge, como finalidad de tales medidas, en línea con lo que se ha señalado respecto a la normativa comunitaria, la de situar a los usuarios con necesidades sociales en condiciones equiparables a las del resto de los usuarios.

Así lo expresa el artículo 12 de este Reglamento relativo al servicio universal:

“Artículo 12. Delimitación de los servicios que se incluyen en el ámbito del servicio universal.

Para la consecución de los objetivos de cohesión económica y social y de igualdad territorial, dentro del servicio universal de telecomunicaciones y de acuerdo con el artículo 37.1 de la Ley General de Telecomunicaciones, se deberá garantizar, inicialmente:

(...)

d) Que las personas discapacitadas o con necesidades sociales especiales tengan acceso al servicio telefónico fijo disponible para el público, en condiciones que les equiparen al resto de los usuarios.”

El artículo 16 del Reglamento concreta esta obligación en los siguientes términos:

“Artículo 16. Discapacitados y colectivos con necesidades sociales especiales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.1.d) de la Ley General de Telecomunicaciones, los operadores designados para la prestación del servicio universal deberán garantizar que los usuarios discapacitados o con necesidades sociales especiales tengan acceso al servicio telefónico fijo disponible al público, en condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de los usuarios.

(...)

Serán objeto de especial consideración los colectivos de pensionistas y jubilados, cuya renta familiar no exceda del salario mínimo interprofesional.

Mediante Orden se establecerán los mecanismos que garanticen el carácter accesible de los servicios, en los términos establecidos en la sección II de este capítulo y en los planes regulados en el artículo 5 de este Reglamento.”



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En conclusión, la normativa española en materia de servicio universal acoge, con relación a las prestaciones destinadas a usuarios con necesidades sociales, los dos aspectos antes destacados con ocasión del examen de la normativa europea:

- a) Que la finalidad que preside la imposición, al operador obligado, de una prestación en beneficio de los usuarios con necesidades sociales especiales (jubilados y pensionistas) es la de equiparlos a los restantes usuarios en lo que se refiere a las condiciones efectivas de acceso a los servicios de telecomunicaciones, y, en concreto, al servicio telefónico fijo disponible al público.
- b) Que el operador obligado a realizar esta prestación a favor de los usuarios con necesidades sociales especiales se encuentra vinculado, en la aplicación de los planes de descuento, por el principio de no discriminación, de modo que no puede discriminar entre los usuarios destinatarios de la medida.

V. NORMATIVA EN MATERIA DE SELECCIÓN DE OPERADOR.

V.1. La normativa europea en esta materia.

La Directiva 2002/22/CE, antes mencionada, contempla las facilidades de selección llamada a llamada y de preselección. Con relación al operador con poder significativo de mercado, el artículo 19 de esta Directiva indica lo siguiente:

“Las autoridades nacionales de reglamentación exigirán a las empresas notificadas como poseedoras de un poder de mercado significativo para el suministro de conexión a la red telefónica pública y utilización de la misma desde una ubicación fija de conformidad con el apartado 3 del artículo 16, que permitan a sus abonados el acceso a los servicios de cualquier proveedor interconectado de servicios telefónicos disponibles al público:

- a) en cada llamada, mediante la marcación de un código de selección de operador,*
- y*
- b) mediante un sistema de preselección, con la posibilidad de anular dicha preselección en cada llamada mediante la marcación de un código de selección de operador.”*

De este modo, las facilidades de selección de operador han de encontrarse disponibles, por parte del operador obligado, para “sus abonados”; lo que el precepto establece con un carácter general, sin que, en principio, se contemple exclusión alguna.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

V.2. Normativa española.

En el artículo 19 de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones contempla la figura de la selección de operador. Dispone lo siguiente:

“Los operadores que, de conformidad con el artículo 10, hayan sido declarados con poder significativo en el suministro de conexión a la red telefónica pública y utilización de ésta desde una ubicación fija, permitirán a sus abonados, en los términos que reglamentariamente se determinen por el Gobierno, el acceso a los servicios de cualquier proveedor interconectado de servicios telefónicos disponibles al público en cada llamada, mediante la marcación de un código de selección de operador, y por preselección, con posibilidad de anularla llamada a llamada mediante marcación de un código de selección de operador. Los precios de interconexión relacionados con las facilidades arriba mencionadas se establecerán en función de los costes.”

Según indica el párrafo segundo del apartado 3 de la disposición transitoria primera de esta Ley General de Telecomunicaciones, *“El Reglamento de desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones actualmente en vigor en lo relativo a interconexión y acceso a las redes públicas y numeración continuará en vigor hasta tanto se aprueben las nuevas normas que desarrollen el título II de esta Ley”*.

Este **Reglamento** (aprobado por Real Decreto 1652/1998, de 24 de julio), **relativo a la interconexión**, el acceso a las redes públicas y la numeración, define -en su artículo 17.1- la selección de operador (ya sea ésta a través de la llamada a llamada, ya sea a través de la preselección -también denominada “preasignación”-) como una facultad que tiene el abonado o usuario del servicio telefónico:

“Se entenderá por selección de operador la facultad del abonado o usuario del servicio telefónico de elegir el operador para cursar todas o parte de sus llamadas o acceder a servicios conmutados de cualquier proveedor de servicios de telecomunicaciones disponibles para el público.

La selección del operador se llevará a cabo mediante el procedimiento de llamada a llamada o mediante preasignación.”

El Reglamento mencionado no contempla en ningún precepto la incompatibilidad de esta facilidad con el hecho de beneficiarse de planes de descuentos asociados a las cuotas de alta y de abono.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Con relación, específicamente, a la facilidad de preselección, la **Circular 1/2001**, de 21 de junio, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sobre la implantación de la preselección de operador por los operadores de acceso obligados a proveerla en el mercado de redes públicas de telecomunicación fijas, acoge el principio de no discriminación, como exigencia que vincula a Telefónica de España también en lo que respecta a esta facilidad de la preselección. Así lo prescribe el apartado quinto.7 de la Circular:

*“El operador de acceso no podrá discriminar a los abonados preseleccionados en la prestación de los servicios suplementarios (tales como conferencia a tres, desvío inmediato, marcación directa, indicación de llamadas en espera y contestador en red, entre otros), ni en la prestación de servicios de asistencia técnica o en el acceso a **planes de descuento**.”*

Así, también en la prestación de la facilidad de preselección, la entidad Telefónica de España se haya vinculada por el principio de no discriminación, no pudiendo discriminar –a la hora de aplicar “planes de descuento” (como es el correspondiente al abono social)- a sus abonados en función de que se hayan o no preseleccionado.

Además, el rechazo a una solicitud de preselección por causa de una incompatibilidad técnica entre la misma y la situación en que se encuentra el abonado sólo puede producirse cuando la causa del rechazo haya sido reconocida por la CMT. Así lo dispone el apartado quinto.8 de la Circular 1/2001, de la CMT, antes mencionada:

“La preselección sólo podrá ser rechazada por razones de incompatibilidad técnica cuando la causa de dicha incompatibilidad de tipo técnico haya sido reconocida por la CMT, sin perjuicio de que las mencionadas causas puedan revisarse con posterioridad, en atención a los avances técnicos que se produzcan.”

Cabe aclarar que ninguna incompatibilidad concurre entre la facilidad de preselección y el plan “abono social”, ya que este plan constituye meramente una condición económica (una condición que se aplica al precio que se factura), sin afectar a ningún aspecto técnico del servicio que se presta.

VI. CONTESTACIÓN A LA CONSULTA PLANTEADA POR ASTEL.

De conformidad con lo expuesto en los apartados anteriores del presente Acuerdo, ha de señalarse que la normativa aplicable en materia de servicio



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

universal y la normativa aplicable en materia de selección de operador no permiten a Telefónica de España discriminar a sus abonados.

Ni la normativa aplicable en materia de servicio universal permite a Telefónica de España discriminar a sus abonados en función de que utilicen, o no, facilidades de selección de operador; ni la normativa aplicable en materia de selección de operador permite a Telefónica de España discriminar a sus abonados en función de que se beneficien, o no, de prestaciones del servicio universal.

Más aún, ciertos preceptos de la normativa española y comunitaria aplicables en estas materias prohíben, específicamente, tales discriminaciones.

Además, las consideraciones valoradas por el Parlamento europeo y el Consejo, y por el legislador español, a la hora de regular el abono social llevan a concluir que no se puede privar a los colectivos sociales beneficiarios de esta medida de ninguna de las prestaciones de que disfrutaban los demás usuarios. Estos colectivos son objeto de una atención preferente, y, en modo alguno, se encuentra justificado, por el hecho de que estos colectivos se vean beneficiados con relación a un determinado servicio (para compensar las barreras –de tipo económico– que sufren), que se les penalizara, en contrapartida, en el régimen de acceso a un servicio diferente (privándoles de las facultades de que disponen los demás usuarios).

En el supuesto objeto de consulta, la concreta prestación de servicio universal de que se trata es el plan de descuento “abono social”. Este plan afecta a la prestación del servicio de acceso. Por este servicio se paga la correspondiente cuota de alta y cuotas periódicas de abono. Sobre tales cuotas se aplica el descuento en que consiste el plan.

La prestación del servicio de acceso es independiente de la del servicio consistente en cursar el tráfico telefónico (que generará las correspondientes facturas en función de las llamadas efectuadas). Habiéndose contratado el servicio de acceso con Telefónica de España (sea cuál sea el régimen de precios de que el usuario se beneficie en relación con ese servicio), el tráfico telefónico se puede cursar con el operador que el usuario seleccione. En eso, precisamente, consiste la facultad de selección de operador que el Reglamento relativo a la interconexión, el acceso y la numeración concede a tales usuarios, y, asimismo, en eso consiste, precisamente, la obligación que dicho Reglamento impone a Telefónica de España de facilitar la selección de operador, ya se trate de selección llamada a llamada o de preselección.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

VII. CONCLUSIONES.

Primera.- Los usuarios acogidos al plan de descuentos “abono social” de Telefónica de España, S.A.U. no tienen establecida en el ordenamiento ninguna limitación en cuanto a la contratación de servicios con otros operadores.

Segunda.- Las facilidades de selección de operador (selección llamada a llamada y preselección) pueden ser contratadas por un usuario acogido al plan de descuentos “abono social” de Telefónica de España, S.A.U., sin que la contratación de dichas facilidades pueda implicar la pérdida del mencionado plan.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

EL SECRETARIO

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Alfonso Ramos de Molins Sáinz de Baranda

Carlos Bustelo García del Real